
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUAL SITUACION COLOMBIANA

Francisco Leal Buitrago*

La situación de Colombia es de suma gravedad. Esta frase la venimos escuchando con mayor frecuencia a lo largo del presente año, no precisamente por problemas económicos, ni por nuestra condición de subdesarrollo, sino por otras causas. La violencia política ha llegado a límites intolerables, no solamente por la acción guerrillera, sino también por la presencia de grupos fantasmales de ultraderecha y por un ambiente de permanente zozobra y de intimidación ideológica. La criminalidad se extiende diariamente por todo el territorio patrio. Los valores cívicos han caído en el olvido. La ética de los negocios es cosa del pasado. La justicia es absolutamente inoperante. El desencuentro cunde en todas las capas de la sociedad.

En medio de este clima de incertidumbre sorprende, por decir lo menos, la inconsciencia de minoritarios pero significativos grupos frente al actual estado de cosas, por el hecho de que el país experimenta un crecimiento económico relativo dentro del endeble contexto latinoamericano. Naturalmente que la falta de compromiso está ligada con la destinación que tienen las ganancias que se desprenden de la bonanza subterránea. A lo sumo, las opiniones se matizan señalando que la economía va bien mientras la política y el país van mal, acogiéndose

así al viejo postulado del natural equilibrio del mercado y a la exterioridad de la política con respecto a lo económico. Pero no es difícil percatarse de la estrecha relación que guarda la desestabilización de la política con su aprovechamiento económico por grupos que parten de una ventajosa posición, dentro de una sociedad irrigada por flujos monetarios poco ortodoxos, que circulan libremente por no encontrar las válvulas y los canales políticos que los orienten y controlen. La fragilidad de este modelo económico de bonanza es clara, aunque para muchos de sus beneficiarios el recurso de los capitales viajeros puede compensar el corto tiempo de su vigencia.

El deterioro de la situación nacional ha acrecentado una mayor percepción de su carácter político por la ciudadanía. Este hecho, aunque puede ser un síntoma positivo, tiene profundas ambivalencias en razón de la misma esencia política de la crisis. En términos generales, la gestación de la crisis por la que atraviesa el país es de vieja data. Las ejecutorias políticas, a partir del cambio de régimen que significó el Frente Nacional, llevaron a la sociedad civil a cuestionar cada vez más la confianza en las instituciones gubernamentales y a buscar alternativas de acción sin que mediaran proyectos políticos nacionales suficientemente viables. El resultado fue la reducción de la capacidad de ejecución de los gobiernos, a medida que se ampliaban las expresiones de poder que se creaban a espaldas de las directrices institucio-

* Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

nales. A su vez, el bipartidismo, que monopolícamamente controló las reglas de juego frentenacionalista establecidas, sufrió una disminución de su credibilidad política, recurriendo al uso clientelista de gran parte de los recursos estatales para compensar la pérdida fortaleza. Las limitaciones que estos acontecimientos provocaron en el poder político del Estado proyectaron la debilidad que éste había experimentado a lo largo de la vida republicana. En esas circunstancias, la emergencia de los grupos guerrilleros y, más tarde, del narcotráfico con su economía subterránea y del militarismo de derecha, añadieron nuevos elementos que llevaron a la crisis política a adquirir la complejidad que ostenta hoy en día.

Los intentos explícitos de solución a la crisis, al menos por parte de los tres últimos gobiernos nacionales, se han dirigido a tratar de controlar las alternativas de acción surgidas por fuera de la institucionalidad del Estado, a causa de la reducción que éste ha sufrido en su capacidad de manejo social y político. Guerrillas, narcotráfico, paros cívicos, marchas campesinas y las modalidades más recientes de asesinatos políticos, crímenes en aras de limpiar la sociedad, listas de amenazados y todo el cúmulo de expresiones ajenas a la normatividad establecida se han intentado combatir con una caótica combinación de represión, tolerancia, ensayos de diálogos y, por qué no decirlo, con las mismas fórmulas de acción que se pretende erradicar. El resultado final ha sido frustrante y las consecuencias catastróficas. Mencionemos al menos tres de las más sobresalientes. Primera, no solamente no se han eliminado o controlado las modalidades de acción surgidas a espaldas del régimen, sino que éstas se han ampliado diversificándose. Segunda, como resultado de la anterior, no solo no se ha recuperado la confianza en el régimen, sino que ésta se ha reducido limitando la credibilidad del actual gobierno. Y tercera, la repolitización de la sociedad, a partir del llamado proceso de paz del anterior gobierno, ha adquirido mayor dinámica, a pesar de las pretensiones que en sentido contrario ha buscado desde sus inicios el mandato del presidente Barco.

Esta última consecuencia, la repolitización de la sociedad, con la mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, ha llevado a que, ante la objetiva visión de fracaso de los intentos gubernamentales de solución, la sociedad civil invente y ponga en marcha sus propias

ideas de solución. A los ya viejos esquemas de solución armada que han ensayado los diferentes grupos guerrilleros, se han sumado las nuevas prácticas de la autodefensa, el crimen político, la intimidación a la libertad de expresión y la agresiva censura ideológica. Todos estos absurdos planes de solución privada, que contribuyen al caos en que se debate el país, son producto de las tendencias hacia múltiples extremismos en la sociedad, que alimentan las retaliaciones, en la misma medida en que se han frustrado los sucesivos mecanismos gubernamentales de solución. Dentro de esta barahúnda, uno de los proyectos políticos que se vislumbra en el horizonte nebuloso es el militarismo que emerge del vacío político que deja la inoperancia gubernamental y la ausencia de verdaderas clases dirigentes.

Este vacío se objetiva en los endebles proyectos políticos del gobierno, en la castración de la creatividad política del bipartidismo y en la pragmática concepción política del lucro fácil de las clases dominantes. En cuanto a las clases subalternas se refiere, los proyectos políticos de las clases populares se refieren a formas de organización, las más de las veces coyunturales, dedicadas a crear mecanismos de presión, en la mayoría de los casos meramente para lograr la subsistencia. Las clases medias, sin parangón en su expansión en los últimos cuarenta años en América Latina, han dedicado su acción política a inventar y llenar los espacios ocupacionales, sociales y políticos que poco les ha brindado el sistema. Desde la inmensa pasividad, la atonía y el conservadurismo sustentados en aparentar lo que no se tiene, hasta la agresividad sindical de supervivencia de clase e incluso guerrillera, la gama de acción de los estratos medios y bajos de las clases medias no ha logrado verter su imaginación política en proyecto alguno que arraigue. Y, finalmente, los estratos altos de las clases medias cifran su esperanza en el efecto de demostración que irradian las viejas y nuevas clases dominantes con su riqueza. En síntesis, la sociedad civil habita un nuevo país, asfixiado por la camisa de fuerza de un viejo « esquema institucional conformado por las mismas instituciones que muchos dicen hay que defender para salvar la democracia colombiana.

Dentro de este apretado esbozo general de la crítica situación nacional se enmarca el evento a que estamos asistiendo. Los centros convocantes nos dedicamos en tres universidades

prestigiosas a la dura brega de contribuir a recrear una Colombia mejor desde la disciplina de lo político. La obligación ética y política que tenemos es la de pronunciarnos y estimular el pronunciamiento del mundo de la investigación social, con la única arma que poseemos: la inteligencia y la razón. Es imperativo defender la libertad de investigación investigando, haciendo claridad sobre la dura realidad colombiana. Las perspectivas de agravamiento de la situación son muy grandes. Por eso es necesario que todos contribuyamos con nuestro trabajo a que ello no acontezca. Aquella Colombia, otra abanderada de Contadora, de la paz interna y externa y hasta de los derechos humanos, es ahora vigilada internacionalmente. Esta vigilancia es un instrumento que debemos fomentar a toda costa. La llamada mala prensa no lo es, si se busca con ello contribuir de manera responsable a frenar el inmenso desbarajuste que experimenta nuestra sociedad. La indecisión, el amedrentamiento, la interrupción de nuestra laboriosidad, no solamente ayudarán al desmoronamiento de cualquier perspectiva democrática en Colombia, sino, en el caso particular, a la decapitación de la producción científica de lo social y al retroceso de la cultura en el país.

Dentro de esta perspectiva, solamente una gran movilización de la sociedad civil, de sus amplios sectores democráticos, puede iniciar un proceso de recomposición política en donde se presione y respalde al Estado, a través de su administrador de oficio, el gobierno, para que asuma las responsabilidades que le competen, las mismas a las que ha sido tan esquivo el mandato del presidente Barco. En consecuencia, me permito proponer a los centros de investigación social, a los investigadores independientes, a los sectores de la cultura, que respaldemos una convocatoria nacional que contemple los siguientes objetivos:

1. Poner freno a la violencia política en todas sus manifestaciones y modalidades;
2. Identificar, juzgar y sancionar a las fuerzas oscuras empeñadas en el asesinato y la intimidación de quienes con su trabajo y sus ideas luchan por una sociedad pluralista;
3. Reformular los procesos y mecanismos tendientes a procurar la reconciliación nacional.

4. Urgir al gobierno en la búsqueda y aplicación de fórmulas realmente eficaces enderezadas a lograr los propósitos de democratización de la vida nacional;
5. Convocar y aglutinar a la ciudadanía y a todas las fuerzas democráticas del país que por encima de intereses partidistas y gremiales estén identificadas en este patriótico empeño;
6. Promover campañas masivas de educación sobre la naturaleza y vigencia de los derechos humanos y de los pueblos;
7. Abrir un proceso de organización y movilización social encaminado a garantizar la permanencia de las tareas propuestas.

Estos propósitos, enriquecidos con los aportes del debate de hoy, -bien pueden servir para abrir un proceso de defensa y desarrollo de la democracia y los derechos humanos en Colombia, en el cual los intelectuales, los profesionales y los trabajadores de la cultura tenemos la responsabilidad de actuar que la crisis nos impone.